

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

ADVERTENCIA OFICIAL.

Las leyes y disposiciones generales del Gobierno, son obligatorias para en la capital de provincia donde se publican oficialmente en ella, y desde cuatro días después para los demás pueblos de la provincia. (Ley de 28 de Noviembre de 1857).—Las disposiciones de las autoridades, excepto las que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán oficialmente, como asimismo cualquier anuncio concerniente al servicio de la Nación que dimanase de las mismas, pero los de interés particular pagarán su inserción, entendiéndose en este último caso con el Editor del Boletín.

SE PUBLICA TODOS LOS DIAS PARES.

PRECIOS DE SUSCRICION.—En Orense, por trimestre, 5 pesetas.—Para fuera de esta capital, franco de porte, por trimestres adelantados, 7 pesetas.—Números sueltos, 38 céntimos.
Se suscribe en esta capital, Imprenta de José M. Ramos y Antonio Otero, Colon, núm. 16.—En las demás provincias, en las principales librerías.

PRIMERA SECCION.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

SS. MM. el Rey Don Alfonso y la Reina Doña Maria de las Mercedes se encuentran en el Real Sitio del Pardo sin novedad en su importante salud.

SS. AA. RR. la Serma. Señora Princesa de Asturias, y las Serenísimas Sras. Infantas Doña Maria del Pilar, Doña Maria de la Paz y Doña Maria Eulalia, disfrutan de igual beneficio en esta Corte.

(Gaceta núm. 21.)

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REAL ORDEN.

Remitido a informe del Consejo de Estado el expediente promovido por D. José de Mesa, vecino de Madrid y Contador general de la casa y estados de Medinaceli, contra una providencia de V. S. relativa a la cuota señalada a la referida casa en el repartimiento general de Cardona para el año económico de 1876 a 77, la Sección de Gobernación de aquel alto Cuerpo lo ha evacuado en los siguientes términos:

«Excmo. Sr.: En cumplimiento de la Real orden de 30 de Octubre último ha examinado la Sección el adjunto expediente, promovido por el Contador general de la casa de Medinaceli contra una providencia del Gobernador de Barcelona, relativa a la cuota señalada a la referida casa en el repartimiento general de Cardona para el año económico de 1876-77.

Resulta de los antecedentes que en 1.º de Febrero de este año el Administrador de la casa de Medinaceli en Cardona, pidió al Ayuntamiento que se rebajase la cuota impuesta a su principal en el repartimiento general, porque se había gravado su riqueza con el 3-28 por 100, cuando como propietario forastero sólo debía satisfacer el 2-41, según lo prevenido en el decreto de 26 de Junio de 1874 y en la Real orden de 31 de Octubre de 1876.

El Ayuntamiento desestimó la instancia, fundándose en que no era

excesiva la cantidad señalada, una vez que no llega al 4 por 100 que autoriza la ley; en que el repartimiento se había aprobado antes de que se publicase la Real orden de 31 de Octubre de 1876, y en que si se atendiera la reclamación se perturbaría la Administración municipal, porque habría que reformar un reparto aprobado por la Superioridad.

Apelado el acuerdo ante la Administración económica, esta se inhibió de conocer en el asunto y remitió la alzada al Gobernador, que, conformándose con el parecer de la Comisión provincial, declaró improcedente la reclamación, porque según la ley de Presupuestos vigente los Ayuntamientos pueden gravar la propiedad territorial con el 4 por 100 de la riqueza amparada, sin que establezca distinción entre los vecinos y forasteros, porque las disposiciones invocadas no son aplicables al caso, puesto que se refieren únicamente al repartimiento general autorizado por la ley orgánica de 1870, en el cual no solamente se atendía a la propiedad para imponer las cuotas, sino también a todas las demás circunstancias en que se encontraban los contribuyentes, y porque debía tenerse en cuenta lo prevenido en los artículos 9, 48 y 66 de la ley Provincial, así como la disposición tercera de la base 11, art. 2.º de la ley de 16 de Diciembre de 1876.

En vista de esto, el Contador general de la casa interesada pide a V. E. que corrija la infracción de ley que se cometió no rebajando a su principal el quinto de la riqueza imponible antes de fijarle la cuota del repartimiento; y la Sección al emitir dictamen, cree que se debe estimar el recurso.

No parece que pudiese ofrecer dudas la aplicación de las disposiciones que regían en materia de repartimientos generales para gastos municipales cuando se aprobó el de que se trata, porque además de lo claro y explícito de aquéllas, se habían dictado gran número de Reales órdenes encaminadas a explicar su verdadero sentido y a desvanecer el error en que habían incurrido varios Ayuntamientos y Comisiones provinciales, entendiéndose que el repartimiento general autorizado por la ley de 20 de Agosto de 1870 era independiente del recargo del 4 por 100 sobre la propiedad inmueble permitido por las leyes y disposiciones que aprobaron los presupuestos generales del Estado. No entrará la Sección a enumerar aquellas Reales órdenes por no ser

prolija, bastando para el objeto del expediente invocar la de 31 de Octubre de 1876, citada por el recurrente, que el Gobernador de Barcelona creyó que no era aplicable al caso, cuando evidentemente lo es, y en la doctrina establecida por esta disposición y otras anteriores que forman jurisprudencia en la materia debieron inspirarse dicha Autoridad y el Ayuntamiento al resolver la reclamación de que se trata.

La ley Municipal, al facultar a los Ayuntamientos para girar un repartimiento entre todos los propietarios del distrito para atender a las obligaciones de sus presupuestos, omitió marcar el tanto por ciento con que podía ser gravada la riqueza territorial; y como esto era originado a abusos y a que se exigieran sacrificios excesivos a los contribuyentes, el decreto-ley de presupuestos de 26 de Junio de 1874 en su art. 6.º estableció que para gastos municipales no se podría gravar la propiedad inmueble con mas que el 4 por 100 de la riqueza imponible que hubiese servido de base para el cupo del Tesoro. Ciertamente es que impropiedades llamó de arbitrios a este repartimiento; pero ni aun así se ha podido ni debió entender que creaba un nuevo impuesto, sino que el tipo de imposición se refería al repartimiento general que establecía el art. 131 de la ley de Ayuntamientos.

El aludido precepto se hizo extensivo al ejercicio siguiente de 1875-76 por Real decreto de 22 de Junio de 1875, y se mantuvo en la ley de Presupuestos de 1876-77, y si en él no se hace distinción entre los contribuyentes vecinos del distrito y los forasteros, consiste precisamente en que tiene que aplicarse con sujeción a las disposiciones de la ley Municipal que fijan la forma y proporción en que se debe concurrir al repartimiento; y este silencio de la ley de Presupuestos, que ha sido uno de los fundamentos para desestimar el recurso, constituye una razón más para que no se dude de que la disposición de que se ha hecho mérito no estableció un nuevo impuesto.

Viniendo ya al punto concreto que ha motivado la instancia de D. José de Mesa, observa la Sección que, según confiesa implícitamente el Ayuntamiento de Cardona, al calcular la riqueza imponible de la casa de Medinaceli, que tiene el concepto de propietario forastero en dicho punto, se infringió la base 3.ª, art. 131, que prescribe que a los contribuyentes que no sean vecinos del distrito se

les rebajará el quinto de la riqueza imponible; y como no se hizo así, el interesado tiene perfecto derecho a que se practique esta deducción, además de la que se previene en la base 8.ª del mismo artículo, que es extensiva a todos los contribuyentes.

Procede, pues, a juicio de la Sección, dejar sin efecto la providencia apelada del Gobernador de Barcelona, y prevenir al Ayuntamiento que rebaje con arreglo a lo que se expresa en este informe la cuota repartida a la casa de Medinaceli, reintegrándole lo que le haya exigido de mas, bien incluyéndolo en el presupuesto próximo, o bien deduciéndolo de las cantidades que aun tenga que satisfacer.

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.) con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 2 de Enero de 1878.—Romero y Robledo.—Sr. Gobernador de la provincia de Barcelona.

Gaceta núm. 7.)

MINISTERIO DE HACIENDA.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la revisión de la carga de justicia de 5.148 pesetas 34 cént. que se consignan en el presupuesto de obligaciones generales del Estado bajo el núm 482 del capítulo y artículos primeros, sección cuarta, a favor del Duque de Albrquerque, Marqués de Alcañices, en equivalencia de las alcabalas de Cuéllar y otros pueblos de su tierra, pertenecientes a la provincia de Segovia:

Resultando que por Real cédula expedida en Medina del Campo en 25 de Agosto de 1470, el Rey D. Enrique IV mandó y dió poder a Pedro de Toledo y a aquellos que de él lo hubiesen, para que en su nombre arrendasen en pública almoneda las alcabalas y tercias de las villas de Roa, Cuéllar, Labrada y sus tier-

de los proyectos que forman los Inge

GOBIERNO DE PROVINCIA.

Circular.

El Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Gobernación me dice de Real orden con fecha 17 del mes próximo pasado lo siguiente:

«Habiéndose dirigido á este Ministerio el Juez de primera instancia del partido de Coin en súplica de que se averigué el paradero de D. Francisco Puente Gimenez, Gobernador civil que fué de la provincia de Málaga en el año de 1873, S. M. el Rey se ha servido disponer, como de Real orden comunicada por el Sr. Ministro de la Gobernación lo verifico, se ponga en conocimiento de V. S. á fin de que practique las necesarias diligencias en averiguación del paradero y domicilio actual del referido individuo.»

Lo que he dispuesto hacer público, encargando á todos los dependientes de mi autoridad, averigüen el paradero y domicilio actual del referido Sr. D. Francisco Puente Gimenez. Orense Febrero 1.º de 1878.

El Gobernador

JUAN C. BERNAD.

SECCION DE FOMENTO.

Minas.

Por Real orden de 23 de Octubre último se adjudica á D. Juan Ruiz de Vargas y Salas el arriendo de los impuestos de canon por superficie y uno por ciento del producto bruto de las minas sitas en la Península é Islas adyacentes, y habiendo sido nombrado Delegado del arrendatario en esta provincia D. Angel Romero Vazquez, encargo muy especialmente á los Sres. Alcaldes y mas Autoridades presten á la Empresa, representada aquí por su Delegado todo el auxilio que reclamare, facilitándole cuantas noticias, certificaciones y demás datos que necesite y crea conveniente solicitar para el mejor desempeño de su cargo; debiendo tenerse muy en cuenta que es de gran interés para el Tesoro público por la participación que tiene en los aumentos el que la misma Empresa los obtenga, una vez realizado el cupo de su arriendo. Orense Febrero 2 de 1878.

El Gobernador.

JUAN C. BERNAD.

TERCERA SECCION

GOBIERNO MILITAR

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se ruega á los Sres. Alcaldes

en cuyos municipios se encuentren los soldados procedentes del regimiento infantería de Otumba Bernardo, del Pozo Rodriguez, Camilo Cacheiro Gil, Indalecio Garcia Torres, Prudencio Alonso Mendez y Manuel Alonso Gonzalez, se sirvan hacerles saber se presenten en este Gobierno militar á recoger sus licencias absolutas.

Orense 1.º de Febrero de 1878.
—El Brigadier gobernador, Ramon Erenas.

QUINTA SECCION.

AYUNTAMIENTOS.

Orense.

Don José Segundo Puga y Lopez, Alcalde Presidente del Ilustre Ayuntamiento de esta capital.

Por el presente segundo edicto cito, llamo y emplazo á Ramon Mendez Gomez, natural de la provincia de Zamora, cuyo paradero actual se ignora, para que sepa y le conste que en el sorteo de mozos responsables al reemplazo del año actual que este Ayuntamiento celebró en el día de ayer le ha correspondido el número 71 y que por lo tanto debe comparecer el domingo próximo 10 del corriente, hora de diez de su mañana al salon de sesiones de esta consistorial donde tendrá efecto el llamamiento y declaración de soldados con el fin de que diga de su derecho lo que le convenga, bien entendido de que si no lo hiciere le parará el perjuicio que haya lugar.

Por tanto las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley, del punto en que dicho joven resida lo enterarán del compromiso en que se encuentra, dictando las disposiciones convenientes á fin de que aquel no pueda eludir de ningún modo su responsabilidad.

Orense 4 de Febrero de 1878.
—J. Segundo Puga.—Por su mandado, Santiago Veiras, Secretario.

Barbadanes.

Se hace saber á todos los vecinos y forasteros terratenientes en este distrito que sufrieron alteraciones en sus riquezas desde el último repartimiento, presenten relaciones de las mismas acompañando los documentos públicos que acrediten haber satisfecho los derechos á la Hacienda por dichas alteraciones en la secretaría de este Ayuntamiento dentro del término de 20 días, pasados los que es no se admitirán por justas que sean las que se presenten y se procederá por quien correspondiera á la ratificación del amillara-

miento que ha de servir de base al reparto de contribucion territorial del próximo año económico de 1878-79.

Barbadanes Febrero 2 de 1878.
—Ramon Selas.

Manzaneda.

Las cuentas de gastos é ingresos municipales correspondientes á los ejercicios de los presupuestos de los años económicos de 1874-75, 1875-76 y 1876-77, estarán de manifiesto en la secretaría de este Ayuntamiento por término de quince días, contados desde la insercion de este anuncio en el Boletín oficial de la provincia, para los efectos del último párrafo del art. 159 de la ley municipal de 1870.

Manzaneda 31 de Enero de 1878. — El Alcalde, Victorino Dominguez.

Cartelle.

Por término de quince días se hallará al público en esta Secretaría la cuenta de fondos municipales correspondiente al año económico de 1876 á 1877 y su período de ampliacion.

Durante el mismo plazo tambien estará de manifiesto el presupuesto adicional del corriente ejercicio, aprobado por el Ayuntamiento previa censura del Sindico.

Lo que se hace público á los efectos prevenidos en la vigente ley municipal.

Cartelle Enero 30 de 1878. — El primer Teniente Alcalde, Ramon Alvarez.

SESTA SECCION.

COLEGIO NOTARIAL

DEL TERRITORIO DE LA CORUÑA.

El Sr. D. Enrique Suarez Monterrey, Magistrado de la Audiencia de este distrito y Presidente del Tribunal de censura para oposicion á Notarías vacantes en el Ilustre Colegio del mismo territorio.

Hace notorio: que por acuerdo de dicho Tribunal y para dar principio al ejercicio de oposicion, se ha designado el día 21 de Febrero próximo y hora de nueve y media de su mañana en la Sala tercera de esta Audiencia. Y para que llegue á noticia de los que se presentaron como aspirantes se espide este edicto, á fin de que comparezcan con tal objeto, si lo tienen por conveniente, en inteligencia de que no verificándolo les obstará este llamamiento.

Dado en la Coruña á 28 de Enero de 1878. — Enrique Suarez. — El Secretario Manuel Davesa.

SÉTIMA SECCION.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA.

En la ciudad de Orense á 31 de Enero de 1878: el Sr. D. Domingo Salazar, Juez de primera instancia en ella y su partido por ante mi Escribano dijo:

Visto este expediente promovido por Perpétua Fernandez, vecina y empadronada en la villa de Allariz, á medio del Procurador D. Manuel Garcia, sobre habilitacion de pobreza para litigar con D. Ricardo Mosquera, de la parroquia de Noalla, en reclamacion de cantidad de reales, y en el que tambien fué parte el Promotor Fiscal y

Resultando cumplidamente acreditado que la Perpétua Fernandez carece de sueldo y salario permanente, industria y comercio, así como de toda clase de bienes, proporcionando la subsistencia con lo que eventualmente gana por su oficio de costurera, cuya utilidad no llega á un real diario, razón porque está habida por pobre lo mismo que su marido José Gomez, ausente en ignoto paradero por la circunstancia de no pertenecerle ningunos conocidos comprobándose tales hechos con no hallarse incluidos en los repartimientos de la contribucion territorial é industria del corriente año económico, segun el certificado expedido por el Secretario del Ayuntamiento de Allariz que obra al folio 26.

Considerando que la Perpétua Fernandez se halla comprendida en el capitulo primero del art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Falla que debe declarar y declarar á la repetida Perpétua Fernandez en clase de pobre por ahora para litigar con D. Ricardo Mosquera, y con opcion á disfrutar de los beneficios que se mencionan en el art. 181 de la misma ley, mandando que para hacerlo constar á donde le convenga se le espida el oportuno testimonio luego que esta sentencia fuere ejecutoria. Y por ella definitivamente juzgando que por la rebeldia del demandado se publique en el Boletín oficial de la provincia, para lo que se dirija copia certificada al Sr. Gobernador civil, lo dispone y firma S. S. de que yo escribano doy fe. — Domingo Salazar. — Ante mí: Manuel Casar. — La que se notificó á las partes.

Lo inserto y relacionado así resulta de la sentencia original que queda en el expediente de su referencia á la que me remito. Y para que conste en virtud de lo mandado como Escribano originario expido la presente que firmo en Orense á 1.º de Febrero de 1878. — Manuel Casar.